



CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y
POLÍTICA SOCIAL

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

ORDEN

NÚMERO 1943/2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Exp.:060/2021

Unidad Administrativa
DIVISIÓN DE
CONTRATACIÓN

Examinadas las actuaciones practicadas y documentos obrantes en el expediente de determinación de responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Pliego de Prescripciones del contrato de referencia, procede resolver teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 20 de mayo de 2022, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid y la entidad MACROSAD S.COOP.AND, (N.I.F. F23322472), suscribieron el contrato titulado "Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Centro de Día) San Sebastián de los Reyes (Moscatelares)". En el citado contrato la entidad se compromete a llevar a cabo la gestión de la Residencia Moscatelares de San Sebastián de los Reyes (C2980), durante el periodo del 1 de junio de 2022, y finalizará el día 31 de diciembre de 2024.

SEGUNDO.- Con fecha 13 de febrero de 2023, en el ejercicio de las funciones de seguimiento y control de la ejecución del contrato, se realiza al centro una visita por un técnico de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia. Como consecuencia de la citada visita, se emite informe técnico en el que se señala que, en la visita a la cocina "se comprueba que había tarrinas de puré de merluza, zanahoria y arroz de Campofrío caducadas del día 11.02.22 que se iban a servir."

TERCERO.- A la vista de lo anterior, con fecha 21 de marzo de 2023, la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, comunicó a la entidad, a los efectos del trámite de audiencia y alegaciones, la siguiente propuesta de imposición de penalidades:

"La tipificación de los hechos descritos en los antecedentes de hecho, como incumplimiento de la obligación contractual descrita en el citado apartado 21.B.1.5 de la cláusula primera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato y como consecuencia, se propone la imposición de una penalidad de 33.820,47euros, como resultado de los siguientes cálculos:

$0,6\% \times 4.141.942,63\text{€}$ (Precio anual de adjudicación, sin IVA)"

En dicha comunicación se concede a la entidad 10 días para efectuar las alegaciones que tenga por convenientes.

CUARTO.- Con fecha 5 de abril de 2023 la entidad presenta alegaciones solicitando la reducción de la sanción propuesta.

QUINTO.- La Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, con fecha 25 de abril de 2023, elevó al órgano de contratación una propuesta de imposición de penalidades por importe de 33.820,47 euros, derivados del incumplimiento citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato en su apartado II.1:

"DEFINICION DEL SERVICIO", señala lo siguiente:

[...]

El adjudicatario prestará en el centro los siguientes servicios:

En la residencia

[...]

a) El alojamiento, que comprenderá: el uso de una habitación y zonas de convivencia; la manutención; la ropa de cama, mesa, aseo, el lavado, repasado y planchado de la ropa personal.

[...]

El apartado VI.1. b) del citado PPT, establece las condiciones en que ha de prestarse el, servicio de manutención.

SEGUNDO.- El apartado 21.B de la cláusula primera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato, establece, entre otras, las siguientes penalidades por ejecución defectuosa del contrato:

"B.1. Muy graves: Se podrá imponer una penalidad del 1% del precio anual de adjudicación del contrato en los siguientes casos:

[...]

B.1.3. Por cada incumplimiento del servicio de manutención que afecte a la cantidad o a la calidad de los alimentos suministrados a los usuarios o a su forma de preparación o administración, que se establece en el apartado V.1.b) del PPT.

[...]

TERCERO.- Entrando en el estudio de las alegaciones efectuadas por la entidad, hay que señalar que las mismas no desvirtúan los hechos objeto de imposición de penalidad ni su cuantía.

La entidad basa sus alegaciones en el hecho de que en el texto del informe y, por tanto, del requerimiento, tal y como se recoge en el antecedente de hecho segundo, los alimentos a los que se refiere no están caducados sino sujetos a un límite de fecha de consumos preferente. No se aporta ninguna prueba fehaciente de este hecho ya que según manifiesta, no poseen fotografías del día que se señala en dicho informe técnico. No obstante, se aporta de fotografías del mismo producto y mismo proveedor, de otras fechas, en el que se señala la fecha de "consumo preferente".

A continuación, la entidad, describe las diferencias entre la caducidad y el consumo preferente alegando que, en este último caso, el consumo de los alimentos no compromete la seguridad alimentaria de los usuarios.

No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que aun admitiendo el error en el informe al utilizar el término "caducidad" en lugar del correcto "consumo preferente", este hecho, tal y como reconoce la propia entidad en su escrito de alegaciones, y acredita mediante diversas menciones de organismos oficiales de consumo, supone una merma importante de las condiciones de calidad en cuanto al sabor, olor, aspecto externo, textura, color, pero sobre todo y como refiere la entidad en su escrito en cuanto a "su contenido nutricional", más aun teniendo en cuenta que, tal y como se recoge en el informe, se había superado la fecha de consumo en más de un año desde el día de la visita.

En este sentido hay que señalar que la penalidad propuesta no se fundamenta en una deficiencia en la seguridad de los alimentos ni en el hecho de que esto suponga un peligro para la integridad física de los residentes, como erróneamente alega la entidad, y que, en cualquier caso, conllevaría una tipificación distinta, sino, como textualmente se refleja en los fundamentos jurídicos, de acuerdo con lo establecido en el punto 21. B.1.3. del PCAP, "por el incumplimiento del servicio de manutención que afecte a la cantidad o a la calidad de los alimentos suministrados a los usuarios o a su forma de preparación o administración, hecho este que ha quedado acreditado mediante la documentación aportada por la entidad de los distintos organismos públicos con competencia en control alimentario.

CUARTO: Una vez rebatidas las alegaciones formuladas por la empresa contratista y constatado que

la misma no aporta ningún dato que desvirtúe el incumplimiento detectado, procede mantener el importe de la penalidad en la cantidad establecida en la comunicación realizada a la empresa contratista en fecha 21 de marzo de 2023 por la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, y que se reproduce en el punto TERCERO de los Antecedentes de Hecho de esta Orden.

De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con la propuesta de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, en aplicación del art. 192.1 de la LCSP, el apartado VII del Pliego de prescripciones técnicas y de la cláusula segunda del documento de formalización del contrato de referencia.

DISPONGO

Imponer a la entidad **MACROSAD S.COOP.AND**, (N.I.F. F23322472), una penalidad por importe de **TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS** (33.820,47 euros) por el incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y el documento de formalización que rige el contrato titulado "*Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Centro de Día) San Sebastián de los Reyes (Moscatelares)*".

De acuerdo con el artículo 194.2 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la penalidad se hará efectiva mediante la deducción de las cantidades que en concepto de certificaciones mensuales deban abonarse al contratista, o sobre la garantía que se haya constituido cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Fecha:

13 de junio de 2023

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (en funciones)
(P.D. Orden 1.558, de 28 de septiembre, BOCM nº 239, de 7/10/2021)
EL VICECONSEJERO DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Firmado digitalmente por: MARTINEZ-SICLUNA SEPULVEDA LUIS